



Sabanalarga, 1 de junio de dos mil veintidós (2022).

<b>PROCESO:</b>	ACCIÓN DE TUTELA.
<b>REFERENCIA:</b>	08-638-40-89-003-2022-00149-00.
<b>ACCIONANTE:</b>	ANJI DEL CARMEN CHAVEZ BLANCO
<b>ACCIONADO:</b>	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SABANALARGA

### ASUNTO

Se procede a dictar fallo dentro de la acción de tutela promovida por la señora, ANJI DEL CARMEN CHAVEZ BLANCO, identificada con el Permiso Especial de Permanencia No. 803517610121991, quien actúa en representación de su hijo menos de edad ALAN JOSÉ DIAZ CHÁVEZ, en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SABANALARGA, por la presunta vulneración del derecho fundamental de Petición, consagrado en nuestra Carta Política.

### ANTECEDENTES

#### **Hechos.**

Se pasa a exponer los hechos presentados por la parte accionante así:

**Primero:** A raíz de la crisis política, económica y social que ha venido presentando el país Venezuela en los últimos años, en octubre del 2017, me vi forzada a abandonar definitivamente el país, ingresando a Colombia por el municipio de Maicao, La Guajira, desde donde me trasladé con mi familia hasta el municipio de Sabanalarga.

**Segundo:** Atendiendo a las dificultades estructurales derivadas de la crisis que atraviesa el vecino país, mi hijo nunca fue registrado en Venezuela, de forma tal que no cuenta con un vínculo jurídico-político con un Estado, ni tiene documento que lo identifique.

**Tercero:** Desde la llegada a Colombia, mi familia y yo hemos buscado herramientas para subsistir, pese a la compleja situación económica en que nos encontramos. Hemos tratado de alcanzar la estabilidad y seguridad que no teníamos en nuestro país.

**Cuarto:** En múltiples ocasiones he solicitado la asignación de un cupo escolar a mi hijo, Alan José Díaz Chávez, no obstante, ello no ha sido posible, pues las instituciones a las que me he acercado me afirman que se debe tener un documento que lo identifique.

**Quinto:** Por tal motivo, el día 22 de febrero de 2022 presenté una petición dirigida a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SABANALARGA solicitando la asignación de un cupo escolar a mi hijo, Alán José.

**Sexto:** El día 6 de abril de 2022, venció el término para dar respuesta a la petición indicada, no obstante, hasta la fecha no he recibido respuesta alguna por parte de la entidad, lo que constituye una vulneración a los derechos fundamentales de petición y educación.

### PRETENSIONES

Teniendo en cuenta los hechos generadores de la presunta vulneración, la parte accionante solicitó al Despacho lo siguiente:

**Primera:** Tutelar los derechos fundamentales a la educación y petición de mi hijo, ALAN JOSÉ CHAVEZ DIAZ.

**Segunda:** Como consecuencia de lo anterior, solicito ordenar a la entidad accionada, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SABANLARGA, que se le asigne un cupo escolar a mi hijo.

### ACTUACIÓN PROCESAL

Estando dentro del término legal, mediante auto del dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), se admitió la presente acción, y se ordenó a la accionada informar dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, las razones de defensa que le asisten frente a las pretensiones de la tutela.

En respuesta al requerimiento, la parte accionada, el día veintitrés (23) de mayo de la presente anualidad, manifestó que efectivamente, el día cuatro (04) de febrero de 2022, la señora ANJI DEL CARMEN CHAVEZ BLANCO radicó petición a este ente territorial, donde se solicitaba la vinculación de su menor hijo a una institución educativa del municipio de Sabanalarga.

De igual modo, expresa que para garantizar el derecho fundamental de educación a la luz de la normatividad vigente en materia de educación, para este ente territorial, resulta difícil realizar el trámite correspondiente ante las instituciones debido a que hasta la fecha el menor no presenta documentación que permita registrarlo en el sistema de matrículas educativas SIMAT, lo cual, es ley para las instituciones al vincular cualquier estudiante; por tanto, es de vital importancia que los acudientes y padres de familia realicen los trámites necesarios de regularización que no solo le permitirán al niño acceder al sistema educativo sino contar con todos los beneficios que la ley otorga a partir de sus derechos. Así mismo, se hace la aclaración que la secretaría de educación de Sabanalarga no se encuentra certificada, lo cual nos limita en nuestras funciones, por ser del resorte Departamental.

Indica la accionada que, teniendo en cuenta lo manifestado en la circular conjunta No 16 del 10 de abril de 2018 expedida por la VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN y el DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA la cual establece y afirma que Migración Colombia no está en la obligación de solicitar visa a los menores de edad para iniciar sus estudios de educación preescolar, básica y media, pese a que la norma lo exija.

En ese caso para inscribir a un menor en el colegio, se necesita alguno de estos requisitos:

1. Visa estudiantil: Dicho documento es expedido por la Cancillería colombiana y se tramita en su página web.
2. Pasaporte Venezolano (para el presente caso)
3. Permiso Especial de Permanencia (PEP)
4. Salvoconducto.
5. Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF): Este documento es expedido por Migración Colombia para el tránsito circunstancial dentro de las zonas de frontera en Colombia. Por el cierre de frontera, no se está expidiendo actualmente.
6. Si el menor "tiene una situación migratoria legalizada deberá registrarse con la cédula de extranjería-CE", que expide Migración Colombia, según la ley.
7. La circular indica que si el estudiante venezolano NO CUENTA con ningún documento de identificación válido, podrá ser registrado con el Número Establecido por la Secretaría (NES). Ese número se emite automáticamente a través del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y consta de 11 caracteres.

Igualmente manifiesta que, aquellos padres o representantes del estudiante deben tener en cuenta que la institución educativa levantará un acta, que queda anexada al expediente del alumno, en la cual queda expresado el compromiso de gestionar el trámite para que el niño o el joven obtenga el documento que le acredite la legalidad dentro del país.

Además, debe tenerse en cuenta que la institución educativa debe inscribir a los niños y niñas extranjeros a la plataforma SIRE (Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros) de Migración Colombia. Así las cosas, los rectores deben informar y dejar constancia por escrito de haber orientado a los padres de familia o acudientes sobre

la necesidad de que el estudiante cuente con los documentos, legales en Colombia, que le permitan adelantar los estudios en el país, así como la presentación de pruebas de estado y obtener el título de grado de bachiller.

En el caso particular del niño Allan José Díaz Chávez al contar con edad de cuatro (4) años, se hizo necesario que la madre del menor brindara información específica respecto al nivel educativo al cual se direccionaba la solicitud, ya que según la edad puede ser matriculado en un hogar infantil o CDI, cuyo manejo corresponde a ICBF o al grado Transición en caso de ser una institución educativa oficial del municipio. Así mismo, según lo señalado anteriormente en la circular conjunta No 16 del 10 de abril de 2018, no se podía llevar a cabo algún trámite con el menor sin que la peticionaria aportara algún documento con el cual se pudiera vincular al menor a la educación inicial del municipio de Sabanalarga.

De igual manera, se le aclaró a la peticionaria que posterior a la entrega de documentos mencionados en la circular conjunta No 16 del 10 de abril de 2018 expedida por la VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN y el DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA la secretaria de educación municipal remitiría su caso ante las instituciones educativas del municipio, la secretaria de educación departamental e ICBF.

En virtud de lo expuesto, la secretaria de educación no cuenta con la competencia directa para dar trámite a la solicitud de cupo del menor en cuestión, habida cuenta que no somos una secretaria certificada. Sin embargo, dentro de nuestra gestión se contactó la madre del menor, quien fue citada el día ocho de abril del presente año a las 9:20 am según consta en acta No 001, en la oficina de la secretaria de educación municipal para brindarle la correspondiente asesoría y acompañamiento. En concordancia, por parte de la secretaria de educación municipal se envió a la rectora de la institución educativa JOSÉ AGUSTÍN BLANCO BARROS -SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER carta de solicitud de cupo para el grado transición, con base a la necesidad expuesta por la peticionaria. Dicha solicitud fue respondida vía telefónica para confirmación de cupo y entrevista con la madre de familia.

De esa gestión, se logró que la peticionaria entregará la documentación a su proceso legal y que el niño fuera aceptado en la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros sede de primaria Francisco de Paula Santander en grado transición, que a la fecha será el centro de formación que le permitirá el restablecimiento de sus derechos como menor.

Finalmente, enuncia que se dio respuesta a la petición con el compromiso de dinamizar los trámites necesarios para resolver todas las peticiones allegadas a la secretaria de educación municipal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Educación Municipal de Sabanalarga, solicita no acceder a tutelar los derechos invocados por haber operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, y por imposibilidad material y jurídica que ampare al menor, pues durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se profiera una orden de protección.

### Acervo Probatorio

El accionante aporta como prueba de sus hechos, los siguientes:

1. Copia de la petición de interés particular presentada ante la entidad accionada.
2. Copia de mi documento de identificación.
3. Constancia de envío del derecho de petición a la entidad accionada.

La accionada aporta como prueba de sus hechos, los siguientes:

4. Documento a fecha de 11 de marzo de 2022 con recibido por parte de la peticionaria.
5. Documentación aportada por la peticionaria para la matricula del menor.

6. Carta enviada por la secretaria de educación a la institución educativa José Agustín Blanco Barros, sede Francisco de Paula Santander para solicitud de cupo.
7. Certificación de matrícula de la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros sede Francisco de Paula Santander.

### CONSIDERACIONES

La Acción de Tutela es una institución jurídica que protege y defiende los derechos constitucionales fundamentales, que es una de las novedades que consagra la constituyente del año 1991, en el Artículo 86 de la Carta Magna, reglamentado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, al tenor dice:

*“(…) Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”  
Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en la que se encuentra el solicitante, debido a que en definitiva implica hacer un estudio analítico del mecanismo judicial “ordinario” previsto por el ordenamiento jurídico en cuanto a su idoneidad para conseguir el propósito perseguido” (...).*

De lo dicho se puede concluir que la acción de tutela solo procede para proteger derechos fundamentales, más no otros de distinto rango, cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por particulares con las características descritas en el inciso final del artículo 86 de la Constitución Nacional, siempre que el solicitante no cuente con otro medio de defensa judicial, a menos que busque un amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Por conocido se tiene que la acción de tutela narrada en el artículo 86 de la Constitución Política fue concebida como un mecanismo ágil, residual y sumario para efectos de amparar derechos fundamentales presuntamente conculcados por autoridades o particulares.

Ahora bien, es esta misma naturaleza, la que obligó a que al momento de desarrollarse normativamente esta garantía constitucional y con la expedición del Decreto 2591 de 1991, se concibieran una serie de causales de improcedencia de la acción. Estas resultan ser:

Artículo 6°. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Lo subrayado es del Despacho.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente acción de tutela, no se abre paso, por las razones que en adelante se expondrán.

### COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este Juzgado es competente para conocer la presente acción de tutela.

### PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

Conforme a lo expuesto por el accionante en el escrito tutelar, en este caso, esta Sede Judicial se adentra resolver, si la encartada dio o no contestación a la petición elevada el día 22 de febrero del 2022 de manera completa y de fondo.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

#### DEL DERECHO DE PETICIÓN

En cuanto al derecho de petición, el artículo 23 constitucional establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” En desarrollo de esta norma constitucional, el Código Contencioso Administrativo contempla, en su artículo 25. De la norma se desprenden varias características referentes al derecho a formular consultas: a. La consulta se debe hacer con respecto a materias de la competencia del consultado. b. El plazo para responderlas es de 30 días. c. Las respuestas a éstas no son vinculantes. d. Las respuestas no comprometen la responsabilidad de la entidad que las atiende. En virtud del principio hermenéutico del efecto útil se debe entender que este derecho a formular consultas implica algo diferente a la solicitud de información - aunque en la resolución de la consulta ésta puede ser suministrada- y a la expedición de copias - aunque también la absolución de ésta pueda comprender el suministro de copias de algunos documentos. Se diferencia también de la petición en interés particular para el reconocimiento de un derecho en virtud de que mientras éste tiene una respuesta que sí vincula a la administración por constituir un acto administrativo, la consulta, como la norma lo dispone, no tiene carácter vinculante. Establecida esta diferencia se puede afirmar que en ejercicio del derecho de consulta se puede solicitar a la administración que exprese su opinión, desde el punto de vista jurídico, sobre determinado asunto de su competencia, recalcando siempre que estos conceptos no son vinculantes, puesto que no se configuran como actos administrativos.

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T 206 de 2018, contempló el de Derecho de Petición en los siguientes términos:

#### EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

8. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Tal derecho permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía, pues es el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes.

9. El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus

garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

9.1. El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.

9.2. El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”.

9.3. El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones. De dicha norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa dirección, “[l]a notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”.

La Corte Constitucional, respecto al contenido u alcance del derecho de petición, se pronunció en Sentencia T-332 de 2015, en la que expresó:

4. Contenido y alcance del derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia.

La Constitución Política en su artículo 23, consagra el derecho fundamental de toda persona a presentar peticiones respetuosas en interés general o particular ante las autoridades y a obtener de ellas pronta resolución de fondo.

La Corte Constitucional se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, “resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política” .

A partir de esta garantía la jurisprudencia ha fijado una serie de reglas y de parámetros relacionados con el alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho. Al respecto ha precisado lo siguiente:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

De otro lado el artículo 14 de la ley 1437 de enero 18 de 2015 o Código de Procedimiento Administrativo sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 preceptúa:

“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá responderse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”

Parágrafo “Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no puede exceder del doble del inicialmente previsto”

Sin embargo, en virtud de la declaratoria de la pandemia ocasionada por el Covid-19, el Gobierno Nacional en el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, modificó tal regla, en el siguiente sentido:

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

- I. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.
- II. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.
- III. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, es claro que un particular puede concurrir ante una entidad o persona natural requiriéndole y es deber de ésta, bajo las aristas del artículo 14 de la pluricitada ley, el extender contestación dentro de los quince (15) siguientes al recibo de la petición.

Ahora bien, conviene aclarar, que para garantizar el Derecho de Petición se deben surtir dos etapas:

- 1) El proferimiento de una respuesta que resuelva de fondo y en forma clara y precisa lo planteado;
- 2) La notificación efectiva de lo resuelto a la parte interesada.

Sobre el punto, ha dicho la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional,

El derecho de petición, debe entenderlo el juez de instancia, no se satisface con la respuesta del trámite interno que la accionada está obligada a seguir. Casi que es un dato irrelevante para el interesado, máxime si se constituye en una negativa a su petición. La garantía de la que estamos hablando se satisface sólo con respuestas. Las evasivas, las dilaciones, las confusiones escapan al contenido del artículo 23 de la Constitución. Es que, en el marco del derecho de petición, sólo tiene la categoría de respuesta, aquello que decide, que concluye, que afirma una realidad, que satisface una inquietud, que ofrece certeza al interesado.

## DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO

En cuanto a la carencia actual de objeto, por Hecho Superado, la Corte Constitucional en Sentencia T-085 de 2019, estableció:

### 3.4. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

3.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

3.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional. En este supuesto,

no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”.

3.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes criterios para determinar si, en un caso concreto, se está o no en presencia de un hecho superado, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

3.4.4. En el asunto bajo examen, la Corte pudo constatar que durante el trámite de la acción de tutela cesó la conducta que dio origen al presente amparo constitucional y que fundamentó la pretensión invocada. En efecto, como se infiere de la respuesta enviada a esta Corporación por parte de la UARIV, al señor Wilson Luna Pabón y a su núcleo familiar se le realizó el proceso de caracterización; aunque vale decir que este no tuvo lugar dentro de los 60 días anunciados por la entidad en su respuesta, pues entre el 27 de junio (fecha de la respuesta) y el 1 de octubre de 2017 (fecha de la caracterización) pasaron más de tres meses. Además, posteriormente, se le reconoció y pagó el monto de la ayuda humanitaria de emergencia, tal como la UARIV lo afirmó en su respuesta y el propio actor lo confirmó mediante llamada telefónica. En este orden de ideas, se encuentra satisfecha la pretensión que motivó el presente amparo constitucional.

Luego, al desaparecer las causas que motivaron la interposición de la presente acción, en criterio de este Tribunal, no solo carece de objeto examinar si los derechos invocados por el accionante fueron vulnerados, sino también proferir órdenes de protección, pues no se trata de un asunto que plantee la necesidad de formular observaciones especiales sobre la materia.

Lo anterior implica que sobre esta acción ha operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, pues durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden de protección. En consecuencia, se revocará el fallo de instancia y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

Expuesto lo anterior, entra el Despacho a exponer el:

### **CASO CONCRETO**

En el presente caso la señora ANJI DEL CARMEN CHÁVEZ BLANCO, interpone acción de tutela al considerar vulnerado el derecho fundamental de petición por parte la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SABANALARGA, al no haber emitido respuesta a la petición elevada el día 22 de febrero del 2022.

De las documentales aportadas con el escrito de tutela se tiene que ciertamente el accionante presentó petición ante la encartada, el día 22 de febrero del 2022, tal como consta de las pruebas aportadas con la tutela, en el archivo nombrado **06Tutela202200149**.

Que si bien la accionante manifestó haber presentado derecho de petición el día 22 de febrero de 2022 Y la accionada manifestó que la respectiva solicitud fue elevada el día 04 de febrero de 2022 (**12ContestaciónTutela202200149**); Se evidencia en las pruebas aportadas que fue instaurada el día 21 de febrero de la presente anualidad. (**06Tutela202200149**)

Ahora bien, es palmario que la señora GLORIA YIMES PARDO en calidad de SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SABANALARGA, alude haber dado contestación de fondo a la petición elevada por la accionante de manera física, el día once (11) de marzo de 2022, mediante el cual se tiene que la entidad dio respuesta de fondo a la petición.

De ello se evidencia en la respuesta de derecho de petición que aporta la parte accionada:



Aunque, la secretaria de educación no cuenta con la competencia directa para dar trámite a la solicitud de cupo del menor en cuestión, sino la Secretaría de Educación Departamental. Sin embargo, dentro de su gestión se logró enviar a la rectora de la institución educativa JOSÉ AGUSTÍN BLANCO BARROS -SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER carta de solicitud de cupo para el grado transición, con base a la necesidad expuesta por la peticionaria.

La cual fue respondida vía telefónica para confirmación de cupo y entrevista con la madre de familia.

**Gobierno** **ALCALDÍA DE SABANALARGA**

LUZ CASTRO BENDIGA  
SECRETARÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ AGUSTÍN BLANCO BARROS - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

**E. S. D.**

**ASUNTO:** Solicitud de ingreso para restablecer a menor José Elías Chávez

GLORIA YRIBES PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.040.016.638 expedida en Sabanalarga - Atlántico, en calidad de Secretaria de Educación Municipal, de la manera más respetuosa, me permite dirigirme a usted con la siguiente solicitud:

Con el propósito de restablecer a su hijo menor al menor José Elías Chávez de cuatro años de edad, quien hasta la fecha no ha podido ingresar al sistema educativo por motivos de carencia en su documentación que según su identidad, según a la institución educativa entregada con la madre de familia del menor ANJI DEL CARMEN CHÁVEZ BLANCO quien a fecha actual cuenta con documentación venezolana (salvoconducto 2019) emitido en el SIMAT de su país y se comprometo a buscar un año, que cuando arribe al expediente del alumno, en la cual se expresa el compromiso de gestionar el trámite para que el niño obtenga el documento que le acredite la legalidad dentro del país.

Lo anterior, como se estipula en la circular conjunta No. 15 del 10 de abril de 2018 expedida por la VICEMINISTERIA DE EDUCACIÓN y el DIRECTOR GENERAL DE MIGRACION COLOMBIA la cual establece y afirma que Migración Colombia no está en la obligación de expedir visa a los menores de edad para iniciar sus estudios de educación preescolar, básica y media, y para a que la norma lo expone en sus casos para ingresar a un menor en el colegio, se necesita alguno de estos requisitos:

1. Visa estudiantil: Dicho documento es expedido por la Consular colombiana y se manda en su propio web.
2. Pasaporte venezolano para el presente caso.
3. Permiso Especial de Permanencia (PEP).
4. Salvoconducto.
5. Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF): Este documento es expedido por Migración Colombia para el tránsito circunstancial dentro de las zonas de frontera en Colombia. Por el tanto de tránsito no se está expediendo actualmente.

Si el menor tiene una situación migratoria legalizada se deberá registrar con la cédula de extranjería-CE, que expide Migración Colombia, según lo no:

1. La circular indica que si el estudiante venezolano NO CUENTA con ningún documento de identificación válido, podrá ser registrado con el Número Establecido por la Secretaría (NES). Este número se emite automáticamente a través del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y consta de 11 caracteres.

En ese sentido, aquellos padres o representantes del estudiante deben tener en cuenta que la institución educativa levantará un acta, que queda anexo al expediente del alumno, en la cual queda expresado el compromiso de gestionar el trámite para que el niño o el joven obtenga el documento que le acredite la legalidad dentro del país.

Además debe tenerse en cuenta que la institución educativa debe ingresar a los datos y datos extranjeros a la plataforma SIRE (Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros) de Migración Colombia.

Por lo anterior, solicito el apoyo y gestión para que el menor pueda ingresar a la institución educativa y recibir los beneficios que por derecho le asisten.

Atentamente

*Recepcionado  
Brenda S. Rojas  
04-10-22  
375*

GLORIA YRIBES PARDO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL  
SABANALARGA - ATLÁNTICO  
Proyecto: Carlos Navarro Navarro - Asesor Educativo

De esa gestión, se logró que la peticionaria entregará la documentación a su proceso legal y que el niño fuera aceptado en la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros sede de primaria Francisco de Paula Santander en grado transición, que a la fecha será el centro de formación que le permitirá el restablecimiento de sus derechos como menor.

**TARJETA ACUMULATIVA DE MATRICULA**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ AGUSTÍN BLANCO BARROS  
SABANALARGA - ATLÁNTICO

Identificación: *Díaz Chávez Alan José* *Santander*  
C.C.: *NUSSA B*

Fecha de nacimiento: *04/02/2012*  
No. de matrícula: *11 de febrero*

Padre o representante: *ANJI DEL CARMEN CHÁVEZ B*  
C.C.: *ANJI CHÁVEZ B.*

Identificación: *23961043* *3008335397*

FECHA			EDAD	GRADO	ALUMNO	PADRE O ACUDIENTE
Día	Mes	Año				
<i>04</i>	<i>02</i>	<i>2012</i>	<i>10/11</i>	<i>10</i>		<i>ANJI</i>

Observación: Al tener el presente documento, sus compromisos a cumplir el Manual de Convivencia de la institución, el cual anexamos.

Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio del Despacho la petición elevada por la señora ANJI DEL CARMEN CHÁVEZ BLANCO, se encuentra resuelta de fondo, en tanto la contestación se encuentra debidamente fundamentada con lo requerido, al responderle la petición de acuerdo a lo solicitado.

Como quiera que la pretensión ya fue satisfecha, la acción de tutela pierde su objeto actual, eficacia e inmediatez y por ende justificación constitucional, debido al cese de la vulneración o la amenaza.

Lo expuesto precedentemente, lleva a concluir a esta Sede Judicial que nos encontramos ante la configuración de un hecho superado, según lo reiterado por la H. Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2012, entendiendo como hecho superado según dicha Corporación, el fenómeno jurídico que se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que 'carece' de objeto el pronunciamiento del Juez, por lo que el amparo deberá negarse por esas razones.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL ORALIDAD DE SABANALARGA, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: DECLARAR EL HECHO SUPERADO** de la presente acción de tutela instaurada por la señora ANJI DEL CARMEN CHÁVEZ BLANCO, quien actúa en representación de su hijo menos de edad ALAN JOSÉ DIAZ CHÁVEZ, en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SABANALARGA, en atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

**SEGUNDO: NOTIFÍQUESE** por el medio más eficaz, tanto a la parte accionante como accionada del resultado de la presente providencia.

**TERCERO:** En firme dicha providencia, si no fuese impugnada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con el Art. 31 del decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**ROSA A. ROSANIA RODRÍGUEZ  
JUEZ**

Firmado Por:

**Rosa Amelia Rosania Rodriguez**

**Juez Municipal**

**Juzgado Municipal**

**Juzgado 003 Promiscuo Municipal**

**Sabanalarga - Atlantico**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **009e37e992be0af5d38157f33a26b11caadb7377c9dbb158af86e4fdf401682e**

Documento generado en 02/06/2022 08:50:43 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**